



Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

CONTENIDO:



**Amphion**  
Henri Laurens  
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Obra ejecutada por Henri Laurens. Fue escogida y ubicada en Plaza Cubierta en 1953, por su contenido poético y la dinámica de sus formas, era una síntesis de la Música y de la Arquitectura y según la leyenda del mito de Amphion -mito de la antigua Grecia. Dicha escultura constituye parte importante del patrimonio de la Universidad Central de Venezuela.

NOTA: Las ideas expresadas en esta publicación son obra exclusiva de su autor. Por lo tanto, el Instituto no se solidariza por los contenidos allí expresados.

# Correo del Instituto de Ciencias Penales

Año 2015

FEBRERO



[cpenales@gmail.com](mailto:cpenales@gmail.com)

## SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

Prof. Luis Ferrer

Instituto de Ciencias Penales

Facebook: Instituto de Ciencias Penales UCV

Twitter: @cpenalesucv

La ciudad hondureña de San Pedro Sula ha sido elegida por cuarto año consecutivo como la ciudad más violenta del mundo. En segundo lugar, quedó la capital venezolana, Caracas; mientras que, el puerto mexicano de Acapulco, ocupó el tercer lugar, de acuerdo a un estudio llevado a cabo por la organización no gubernamental mexicana "Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal", difundido en Enero de 2015, en el cual se recurrió a fuentes de información oficial de los distintos países, a las cuales se tiene acceso por internet.

La experiencia venezolana demuestra que las acciones oficiales en el área de la seguridad suelen orientarse por el temor presente en la sociedad y por la búsqueda de soluciones a corto plazo, con un predominio de políticas que le dan prioridad al uso de la fuerza y a las limitaciones a los derechos fundamentales, en perjuicio, de verdaderas acciones que contribuyan a la profundización de la democracia.

La pérdida de capacidad del Estado para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico y resolver los problemas de seguridad ha originado una tendencia, cada vez más creciente, de la ciudadanía a alejarse de los mecanismos públicos de justicia, por considerarlos inútiles para enfrentar la inseguridad. Esta conducta puede producirse por distintas vías, que van desde la renuencia de la población a denunciar los hechos delictivos, el aislamiento en urbanizaciones privadas y la proliferación de empresas de seguridad privada, así como también las acciones de linchamiento y la justificación de justicia por propia mano como recursos para combatir la delincuencia.

El apoyo a la democracia como sistema de gobierno cada día se ve más seriamente afectado por la percepción de inseguridad y la baja valoración del desempeño del gobierno en el combate a la delincuencia que existen en la colectividad.

Esta apreciación de los ciudadanos es preocupante, ya que la seguridad requiere la intervención de todos los sectores de la sociedad, toda vez que se trata de un problema que involucra a los organismos policiales, pero que también requiere de la participación conjunta de los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, ya que la seguridad es primordial para la gobernabilidad local, estatal y nacional.

La integración entre gobernantes y ciudadanos debe apostar por la construcción de una cultura de paz que utilice mecanismos de justicia complementaria para la solución pacífica de conflictos, haciendo énfasis en la educación preventiva, el desarrollo comunitario y la capacitación de las personas para la toma de decisiones.

Por otra parte, la lucha contra la inseguridad debe ser considerada desde una perspectiva integral en la que se combinen la prevención y el control del delito con la formulación de políticas públicas de seguridad con contenido social que permitan la incorporación y participación en las mismas, de las personas que presentan un alto grado de vulnerabilidad frente al delito, ya sea como sujetos activos o pasivos del mismo.

En el mismo orden de ideas, vale destacar que, las políticas públicas de seguridad requieren de un contexto social donde insertarse y de una garantía de respeto a los derechos humanos durante su ejecución, de modo que se obtenga la cooperación directa de las personas que son las destinatarias de esas políticas.

En conclusión, las políticas públicas deben estimular la colaboración de la sociedad, porque la seguridad es un bien que apunta a la calidad integral de vida de los ciudadanos y no sólo a la ausencia de delitos contra la integridad física o moral de las personas.